

Señores

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (REPARTO)

PROCURADORA 215 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: **DEMANDA**

Demandante: **BERCELY QUIROGA VARGAS**

Demandado: **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

MARIA EUGENIA RANGEL GUERRERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.896.860 expedida en San Gil, Portadora de la Tarjeta Profesional No. 179.942 del Consejo Superior de la Judicatura como abogada apoderada, con domicilio laboral en la carrera 10 No. 9-31 oficina 202 edificio Imperium San Gil (Sder), con número telefónico 3134018086, con correo electrónico mariangel2016r@gmail.com correo para efectos de notificaciones CANAL DIGITAL y dirección física en la Carrera 10 N° 10-31 oficina 202 edificio Imperium, San Gil Santander; y numero de celular 3134018086, obrando en nombre y representación de **BERCELY QUIROGA VARGAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.495.679 Expedida en Bolívar (Santander), y domiciliado en el Municipio del Peñón (Santander) con correo electrónico para efectos de notificación bercelly_qv@hotmail.com, me permito **SOLICITAR CONCILIACION PREJUDICIAL**, en proceso contra la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra Auto fiscal No. URF1-0006 del 25 de julio de 2024 *“Por medio del cual se profiere fallo mixto de responsabilidad fiscal dentro del prf-2019-00495 - departamento de Santander”*, Auto No. 00262 del 14 de agosto de 2024 *“Auto mediante el cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra el fallo mixto de responsabilidad fiscal dentro del prf-2019-00495 - departamento de Santander entre otras disposiciones”*, y el auto No. ORD -801119-199-2024 del 12 de septiembre de 2024 *“Por el cual se revise en grade de consulta y desatan unos recursos de apelación contra el fallo con y sin responsabilidad fiscal proferido dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00495.”*

I. PRETENSIONES

PRIMERO: Que se DECLARE nulo y dejar sin efectos jurídicos el fallo de responsabilidad fiscal No. URF1-0006 del 25 de julio de 2024 *“Por medio del cual se profiere fallo mixto de responsabilidad fiscal dentro del prf-2019-00495 - departamento de Santander”*, Auto No. 00262 del 14 de agosto de 2024 *“Auto mediante el cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra el fallo mixto de responsabilidad fiscal dentro del prf-2019-00495 - departamento de Santander entre otras disposiciones”*, y el auto No. ORD -801119-199-2024 del 12 de septiembre de 2024 *“Por el cual se revise en grade de consulta y desatan unos recursos de apelación contra el fallo con y sin responsabilidad fiscal proferido dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00495.”* En donde se condena a mi mandante en forma solidaria responsabilidad fiscal en titulo de culpa grave por una cuantía indexada de MIL

OCHOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.807.549.168,64) por considerar configurado la inexistencia de responsabilidad fiscal, un posible irrequicimiento ilícito del estado a cargo de los particulares y caducidad de la acción fiscal, y se reconozca en consecuencia el resarcimiento de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales a él ocasionados.

SEGUNDO: Que se RESTABLEZCAN los derechos tanto personales, económicos y políticos de mi poderdante de acuerdo a lo argumentado y probado; esto es que se levante la inhabilidad registrada en los antecedentes ante la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO: Que se CONDENE por perjuicios materiales y morales además de las costas y agencias en derecho que se han invertido para el trámite del presente proceso. De la siguiente manera:

a) Por Perjuicios Materiales:

Por daño emergente la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) o lo que se encuentre probado dentro del proceso.

Por lucro cesante lo dejado de percibir desde la fecha que se generó por inhabilidad para contratar con el Estado y que asciende a la suma de la solicitud de seis Millones de pesos (\$6.000.000), mensuales y que deberá re liquidarse hasta la fecha efectiva del pago., Esta suma corresponde al contrato de prestación de servicios que tenía mi poderdante prestando servicios al estado y que por la inhabilidad sobreviniente debió dejar de recibir.

b) Por Perjuicios Morales:

El equivalente a 50 SMLMV, por el estrés, angustia, pérdida de confianza legítima, vulneración al buen nombre, al derecho de trabajo y al mínimo vital entre otros que se han producido por la arbitrariedad fiscal. O lo equivalente probado dentro del proceso.

c) Por Costas y agencias en derecho:

Que reconozca y pague por costas y agencias en derecho, que se han invertido para la interposición el presente trámite.

II. DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

i. Parte Solicitante

La integra el señor BERCELY QUIROGA VARGAS, mayor de edad, identificado con la

cédula de ciudadanía número 91.495.679 Expedida en Bucaramanga (Santander), y domiciliado en el Municipio del Peñón (Santander), de quien soy su apoderado,

III. HECHOS

1. El OCAD Santander mediante Acuerdo 03 del 17 de diciembre de 2012 aprobó el Proyecto No. 2012004680075 denominado «CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO POSTENSADO DE DOS LUCES CON UN APOYO CENTRAL CIMENTADO DENTRO DEL CAUCE DEL RIO HORTA EL PEÑÓN, SANTANDER» por un valor inicial de \$1.062.190.703. Más adelante el proyecto fue ajustado a través del Acuerdo 012 del 06 de noviembre de 2013 designando como ejecutor al Municipio de El Peñón e incrementando el valor del proyecto en \$240.244.269 aportados directamente por el Departamento de Santander y resultando un presupuesto definitivo de \$1.302.434.972
2. El proyecto fue desarrollado mediante el Convenio Interadministrativo No. 5277 del 08 de noviembre de 2013 suscrito en el Departamento de Santander y el Municipio El Peñón por el valor de \$1.302.434.972 aportados en su totalidad por el Departamento de Santander proveniente de asignaciones directas conforme al CDP No. 15001244 del 03 de febrero de 2015.
3. Para cumplir el Convenio 5277, el Municipio de El Peñón suscribió los Contratos de Obra Nos. 061 de 16 de julio de 2014 e Interventora No. 2488 del 05 de septiembre de 2014 desembolsando al contratista por concepto de ejecución de obra el valor de \$1.031.010.333 equivalentes al acumulado, reconocido y pagado hasta el acta de recibo parcial de obra No. 5 del 18 de diciembre de 2017.
4. Que, dentro de la ejecución de la obra planteada, el presupuesto evidentemente destinado para la obra, al tratarse de la intervención dentro de una fuente hídrica, es de anotar que los cambios naturales pueden ser inciertos.
5. De acuerdo a lo anterior, dentro de los estudios efectuados el presupuesto era el indicado, sin embargo, se hizo necesario la realización de obras básicamente adicionales como fue el de una base más en concreto como soporte del puente objeto del contrato. Del cual era de vital importancia para entregar una obra con las medidas adecuadas para prestar su función a la comunidad sin que este acarrear a corto, mediano o largo plazo una posible caída.
6. Adicionalmente, el presupuesto asignado fue debidamente utilizado dentro de la obra más aún que no se diera la conclusión de la obra de manera irresponsable, arbitraria y contraria a toda seguridad para el interés de la comunidad.

7. Que, de acuerdo a los estudios técnicos realizados por el mismo contratista, era necesario el uso de ese presupuesto para las bases, para mayor soporte, durabilidad y seguridad para la comunidad quien gozaría de este puente.
8. Con ocasión a la auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría Intersectorial de Regalías de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander a las vigencias 2014-2017, que fueron destinados a la «[construcción sistema de saneamiento básico Onzaga-Santander]», se estableció el Hallazgo Fiscal No. 71197 frente al incumplimiento en el Contrato de Obra No.061 de 2014, que tenía como objeto la construcción de un puente postensado de dos luces con apoyo central cimentado dentro del cauce del río Horta en el Municipio El Peñón-Departamento de Santander.
9. mediante el Auto No. 028 del 21 de mayo de 2019, la Gerencia Departamental Colegiada de Santander dispuso la apertura del proceso de responsabilidad fiscal al que se le asignó el número 2019-00495, en atención al daño patrimonial causado a los recursos del Municipio El Peñón en el que vincularon como presuntos responsables fiscales en donde en uno de estos se encuentra mi poderdante.
10. Mediante el Oficio 2021EE0097386 del 18 de junio de 2021, se comunicó a la alcaldía de El Peñón de la visita especial que se llevaría a cabo en el municipio los días 28 de junio al 02 de julio de 2021.
11. A través del Oficio 2021IE0060918 del 02 de agosto de 2021, fue entregado el Informe Técnico por parte de la profesional de apoyo técnico.
12. Mediante el Auto URF1-000404 del 29 de diciembre de 2023, esta Dependencia imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, por el valor de \$1.238.230.432, a los siguientes presuntos responsables fiscales: BERCELY QUIROGA VARGAS, FRANCISCO JESÚS CRUZ QUIZA, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ZARATE, FERNANDO FERREIRA TOVAR, INGENIERÍA Y SERVICIOS LTDA., INGREAM S.A.S., CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ, LUIS EMILIO ROJAS PABON, CECILIA ELVIRA ALVAREZ CORREA GLEN, GIOVANNY CORTES SERRANO, RICAR ALFONSO AGUILAR VILLA, CARLOS ARTURO IBAÑEZ MUÑOZ, ISIDRO MOGOLLON BLANCO, LETTY AZUCENA ROJAS TÉLLEZ, JORGE MARTINEZ GALVIS LUIS ANTONIO DIAZ FLOREZ
De igual manera se dispuso mantener vinculados a los terceros civilmente responsables LIBERTY SEGUROS S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y LA PREVISORA S.A.
13. Con el Auto URF1-00118 del 22 de marzo de los corrientes, esta Dependencia

dispuso la práctica de una visita técnica al sitio de los hechos por parte de un profesional en ingeniería civil.

14. El 29 de abril de 2024, el profesional en ingeniería civil Oscar Javier Castellanos designado a este Despacho como apoyo técnico presentó el informe técnico a él encargado con respecto al estado actual del puente y su correspondiente funcionalidad.
15. A través del Auto 00203 del 20 de junio de 2024, la Contraloría ordenó la incorporación del material probatorio recaudado posterior al auto de imputación y dictó otras disposiciones.
16. Que mediante fallo No. URF1-0006 POR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE FALLO MIXTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PRF-2019-00495 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, del 25 de Julio de 2024, Fallar con responsabilidad fiscal así.

PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, a título de culpa grave, en cuantía indexada equivalente a MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.807.549.168,64) en forma solidaria, en contra de las siguientes personas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia: *BERCELY QUIROGA VARGAS*, CC. 91.495.679, en calidad de Alcalde Municipio El Peñón 2012-2015; *FRANCISCO JESÚS CRUZ QUIZA*, CC. 13.953.955, en calidad de Alcalde Municipio El Peñón 2016-2019; *LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ZARATE*, CC. 1097664249, en calidad de Secretario de Planeación del Municipio El Peñón; *FERNANDO FERREIRA TOVAR*, CC. 91.010.173, en calidad de miembro del Consorcio Vías y Estructuras 2014; *INGENIERÍA Y SERVICIOS LTDA.*, NIT. 900.184.047-1, en calidad de miembro del Consorcio Vías y Estructuras 2014; *INGREAM S.A.S.*, NIT. 804.012.750-4, representado legalmente por Octavio Reyes Sarmiento, identificado con la cédula No. 88.280.981, en calidad de como miembro de la Unión Temporal Puente El Peñón, Interventor Contrato de obra N°061-2014; y *CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER*, NIT. 800.218.136-2, en calidad de miembro de la Unión Temporal Puente El Peñón e Interventor Contrato de obra N°061-2014.

17. A lo que a este fallo se repuso dentro del termino pertinente a lo que la Contraloría General de la Nación mediante auto No. 00262 del 14 de agosto de 2024. En donde no concede la reposición, y rechazar de plano la solicitud de nulidad interpuesta por mi poderdante.

18. A lo anterior en grado de consulta y recurso de apelación LA SALA DE DECISION DE LA SALA FISCAL Y SANCIONATORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA mediante auto No. ORD-801119-199-2024 del 12 de septiembre de 2024. A lo que confirma el fallo apelado.

19. Así de cosas, no se tuvieron en cuenta algunos aspectos que es importante ser aclarados, y son de evitar importancia para demostrar la inexistencia de responsabilidad fiscal por parte de mi poderdante.

20. Que al Sr. Bercely fue declarado como responsable fiscal por haber firmado un convenio en el año 2013; eso dice el pliego de cargos; luego en el fallo de primera instancia dice que por no haber vigilado la ejecución del contrato de obra y por no haber presentado supuestamente estudios y diseños a tiempo;

IV. JURAMENTO

Manifiesto que a la fecha no hemos interpuesto por iguales hechos y entre las mismas partes demanda de esta naturaleza.

V. CASO EN CONCRETO

1. ARGUMENTOS DE LA CONTRALORIA PARA IMPONER RESPONSABILIDAD FISCAL AL SR. QUIROGA VARGAS:

AUTO DE PLIEGO DE CARGOS

BERCELY QUIROGA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.495.679, quien para la época del detrimento fiscal se desempeñaba como Alcalde del Municipio El Peñón durante el periodo 2012-2015, Ente Ejecutor del Proyecto de Inversión No. BPIN 2012004680075. Fue vinculado a la investigación en calidad de ordenador del gasto puesto que suscribió el Convenio Marco de Cooperación No. 5277 de 2013 en Representación del Municipio El Peñón, producto del cual se incorporaron los recursos para la celebración del Contrato de Obra Pública No. 061 de 2014, de modo que, le correspondía velar por la correcta ejecución de los recursos públicos. Fue quien presentó el proyecto de inversión para su aprobación y posterior ejecución a través del convenio y contrato de obra citados, sin aparentemente haber prestado diligencia en la revisión y adecuación de las falencias que sobre el mismo recaían puesto que siendo el representante legal del municipio le correspondía promover, identificar, diseñar estructurar y formular las actividades específicas al cumplimiento del objeto del Convenio 5277 así como del Contrato 061, sumado a que, de acuerdo al Manual de Funciones le correspondía «visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en el territorio de

la jurisdicción», situación que presuntamente no cumplió puesto que no se evidenció un acompañamiento constante a la obra objeto de reproche fiscal. De acuerdo al Acta de Comité Técnico No. 02 al contrato de obra, se indicó que hasta el momento «el Alcalde no entregó el proyecto en digital pero los diseños y estudios no tienen firmas» por lo que la interventoría solicitó nuevamente los diseños aprobados para poder iniciar la obra, de igual manera en el Acta de Comité No. 04, fue consignado que la alcaldía no cumplió a cabalidad los compromisos adquiridos, situación que no permitía conocer el alcance real del proyecto y cantidades de obra, por lo que pareciera demostrar una negligencia y falta de cuidado en su deber de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo de acuerdo al Manual de Funciones del municipio, por lo cual le será imputada responsabilidad fiscal a título de culpa grave, de manera solidaria con las demás personas aquí vinculadas por el monto no indexado de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.238.230.432) Nexo causal En su calidad de Alcalde del Municipio El Peñón suscribió el Convenio 5277 al igual que el Contrato 061, avaló unos estudios y diseños desactualizados y deficientes, de igual manera aprobó los pagos desembolsados al contratista de obra frente a una obra que se encuentra inconclusa en la actualidad, resultando en un detrimento a las arcas del Estado por el valor de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.238.230.432).”

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL

- **BERCELY QUIROGA VARGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.495.679, quien para la época del detrimento fiscal se desempeñaba como Alcalde del Municipio El Peñón durante el periodo 2012-2015, siendo representante del Ente Ejecutor del Proyecto de Inversión No. BPIN 2012004680075 de acuerdo al Acta 008 de 06 de noviembre de 2013.

Fue vinculado a la investigación en calidad de ordenador del gasto, toda vez que presentó el proyecto y suscribió el Convenio Marco de Cooperación No. 5277 de 2013 en Representación del Municipio El Peñón, producto del cual se incorporaron los recursos para la celebración del Contrato de Obra Pública No. 061 de 2014, de modo que, le correspondía velar por la correcta ejecución de los recursos públicos.

Es más, existe un claro incumplimiento a lo estipulado en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 *«DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines...»*. En tanto que **BERCELY QUIROGA** debió, desde la etapa de planeación del proyecto, prever las diferentes anomalías que se presentarían en tanto que presupuestalmente el proyecto no coincidía con las cantidades de obra como quedó demostrado desde el inicio, pues recuérdese que el Ministerio de Transporte en la fase PREOCAD, advirtió que *«era necesario verificar y revisar las memorias de cálculo de las cantidades de obra, porque no coincidía lo expresado en el presupuesto con las cantidades calculadas»*, siendo ese un aspecto que podía preverse desde la formulación del proyecto y no lo hizo.

Situación que encuentra asidero en las obligaciones plasmadas en el convenio marco de cooperación en las que se estableció la de elaborar los estudios y diseños para la ejecución de la obra objeto de investigación, así como ejercer la supervisión a través de la Secretaría de Planeación Municipal. Obsérvese:

3) Elaborar los estudios y diseños complementarios correspondientes para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, de acuerdo al proyecto radicado y viabilizado en el Departamento de Santander.

(...)

5) Ejercer la supervisión a través de la Secretaría de Planeación Municipal, sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente convenio (...) Negrilla del Despacho.

Obsérvese al respecto que desde el convenio de cooperación suscrito entre el Departamento de Santander y el Municipio de El Peñón se consagraba la obligación de elaborar los estudios aun cuando fuesen complementarios, circunstancia que no fue cumplida conforme se probó en el proceso, puesto que, si bien sirvieron de soporte para la estructuración de la licitación pública y posterior contrato de obra del **punto en concreto postensado** fueron diseñados por ETA SA y donados por la Comunidad Europea, también lo es que el municipio en cabeza de **BERCEL** Y QUIROGA para ese entonces debía prestar diligencia y adecuación a las falencias que sobre el proyecto podían recaer.

Así, no le asiste razón al vinculado en los descargos, al indicar que se le imputaron funciones de la «*Resolución Orgánica No. 0035 de 30 de abril de 2020 y 0048 de 30 de junio de 2021*», porque ello no corresponde con la realidad, toda vez que, la atribución fáctica y jurídica endilgada a él, lo fue como ordenador del gasto, sin que quede duda que se trata de la persona que presentó el proyecto de inversión para su aprobación y suscribió el Convenio de Cooperación.

Es más, no fue desvirtuado que le correspondiera supervisar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el convenio, incluso, a través de la Secretaría de Planeación, por lo que no podía desligarse de dicha obligación a pesar de haber sido delegada en la secretaria de planeación. Así recuérdese que el parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998 que señala que «*En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal*».

En ese sentido, véase como en el presente caso y tal como le fue endilgado al representante legal del municipio le correspondía promover, identificar, diseñar estructurar y formular las actividades específicas al cumplimiento del objeto del Convenio 5277 del 2013 así como del Contrato 061 de 2014.

Además, que, tal y como se señaló en el auto de calificación de causa fiscal, de acuerdo al Manual de Funciones le correspondía «*visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción*», situación que como se probó no cumplió puesto que no se evidenció un acompañamiento constante a la obra objeto de reproche fiscal.

Tanto así que, del material probatorio recaudado se evidenció un actuar negligente por parte de la Alcaldía, tal como quedó consignado en las Actas de Comité Técnico Nos. 2 y 4 en las que se manifestó lo siguiente:

- Acta de Comité Técnico No. 02 al contrato de obra, se indicó que hasta el momento «*el Alcalde no entregó el proyecto en digital pero los diseños y estudios no tienen firmas*» por lo que la interventoría solicitó nuevamente los diseños aprobados para poder iniciar la obra.
-

- Acta de Comité No. 04, fue consignado que la alcaldía no cumplió a cabalidad los compromisos adquiridos, situación que no permitía conocer el alcance real del proyecto y cantidades de obra. Así lo indicó *«La alcaldía no ha cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos en el tercer comité a pesar de establecer que los enviaría en la menor brevedad posible, ya han pasado 34 días desde que se realizó este compromiso, la demora de estos documentos de Estudios y Diseños no permite conocer: real alcance del proyecto y cantidades de obra»*.

Durante la fase de descargos, el imputado no logró desvirtuar ni probar acciones o conductas dirigidas a velar por el debido resguardo del recurso público, por el contrario, los demás involucrados en el círculo contractual fueron coincidentes en reconocer las obligaciones a cargo de la Alcaldía Municipal para promover, impulsar, supervisar la ejecución del proyecto.

De la verificación efectuada a la ejecución del proyecto, se evidenciaron múltiples falencias de planeación que afectaron la ejecución de la obra, la cual no está en funcionamiento y el recurso invertido no ha cumplido el fin buscado en la contratación.

Así las cosas, se tiene que el Alcalde como representante legal del Municipio de El Peñón, y con las facultades otorgadas en el ordenamiento jurídico, especialmente acorde con la responsabilidad que acarrea el cargo, según lo contempla la Ley 80 de 1993 artículos 12, 26 numeral 5, 28, y 51, y Ley 489 de 1998 parágrafo del artículo 12, debió estar atento a la culminación de las obras contratadas y si era del caso, iniciar las acciones administrativas para establecer el incumplimiento contractual por parte del contratista y hacer efectivas las correspondientes pólizas del contrato, labores éstas que no se han evidenciado, por el contrario, según el informe técnico de abril de 2024, se evidencia que no fue terminada la obra de modo íntegro.

Considera este Despacho, que esta omisión contribuyó a las irregularidades advertidas, ya que las falencias detectadas y la omisión por parte del Alcalde Municipal, ha traído como resultado la NO FUNCIONALIDAD de la obra, que ésta se encuentre en ESTADO DE ABANDONO e INCONCLUSA y que los recursos invertidos en el proyecto se encuentren subutilizados por que los fines sociales que se tenían al momento de la iniciación del proyecto, no se han cumplido.

De modo que, no es de recibo para este Despacho su manifestación en el escrito de defensa de haber realizado las debidas revisiones a la obra como consta en las actas e informes, puesto que, como se probó, demostró una negligencia y falta de cuidado en su deber de dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo de acuerdo al Manual de Funciones del municipio, configurándose una conducta gravemente culposa que contribuyó a la

causación del daño patrimonial al Estado, razón por la cual será llamado a responder fiscalmente en forma solidaria por la suma indexada de **\$1.807.549.168,60**.

RESPUESTA RECURSO DE REPOSICION

Frente al planteamiento de que el señor BERCELY actuó en cumplimiento de funciones como alcalde, dicho planteamiento está destinado a perecer toda vez que, tal y como fue señalado en el fallo proferido por esta Dependencia se mencionó que de acuerdo al Manual de Funciones como alcalde, al señor QUIROGA le competía «visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción», situación que como se probó no cumplió puesto que no se evidenció un acompañamiento constante a la obra objeto de reproche fiscal De cara a la inexistencia del daño patrimonial a las arcas del Estado referida por el inconforme por encontrarse aún en ejecución, esta Dependencia le informa que lo dicho no es cierto, en virtud a que no puede obviarse el cumplimiento del Contrato 061 de 2014 por haberse suscrito un contrato posterior, recuérdese que el contrato inicial tenía prevista la construcción de la totalidad del puente y no

solamente la subestructura que únicamente se construyó. Frente al argumento expuesto por el recurrente de que «de pronto hubo falta de planeación», esta Dependencia coincide con el inconforme y le confirma que en efecto se presentó una deficiencia en la planeación pues los estudios previos del Contrato de Obra 061 no previeron el ítem manejo de aguas necesario para la correcta ejecución de la obra, además el hecho de que sea un caso de miles en que falla el principio de planeación como refiere el recurrente no es una causal excluyente de responsabilidad fiscal y solo reafirma la función que ejerce este órgano de control de impedir que se sigan presentando. Por otro lado, frente al planteamiento referente a que el Municipio de El Peñón actuó solamente como proponente y facilitador de la información en el proceso de evaluación y aprobación del proyecto y que correspondía a la Secretaría Técnica del OCAD advertir las falencias que el proyecto presentaba, esta Delegada le indica que dicho argumento no está destinado a prosperar en atención a que tal y como se refirió en el Fallo URF1-0006 del 25 de julio de 2024, al Municipio de El Peñón le correspondía: 3) Elaborar los estudios y diseños complementarios correspondientes para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, de acuerdo al proyecto radicado y viabilizado en el Departamento de Santander.

5) Ejercer la supervisión a través de la Secretaría de Planeación Municipal, sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente convenio (...) Negrilla del Despacho. Así lo establecieron las obligaciones plasmadas en el convenio marco de cooperación, de modo que, siendo el representante legal del Municipio dichas obligaciones recaían en su cabeza y por tanto no es aceptable para esta Dependencia el planteamiento expuesto por el recurrente. Ahora bien, con respecto al argumento relativo a que el señor QUIROGA VARGAS adelantó las gestiones definidas desde los comités técnicos y desde los informes de avance de obra realizados por la secretaria de planeación municipal contratista e interventoría, y que gracias a ello se realizaron suspensiones al convenio y de obra mientras se gestionaban las soluciones planteadas, esta Delegada le informa que lo dicho por el inconforme está destinado a perecer toda vez que en el fallo proferido por esta Delegada se expresó lo siguiente: Del material probatorio recaudado se evidenció un actuar negligente por parte de la Alcaldía, tal como quedó consignado en las Actas de Comité Técnico Nos. 2 y 4 en las que se manifestó lo siguiente: - - Acta de Comité Técnico No. 02 al contrato de obra, se indicó que hasta el momento «el Alcalde no entregó el proyecto en digital pero los diseños y estudios no tienen firmas» por lo que la interventoría solicitó nuevamente los diseños aprobados para poder iniciar la obra. Acta de Comité No. 04, fue consignado que la alcaldía no cumplió a cabalidad los compromisos adquiridos, situación que no permitía conocer el alcance real del proyecto y cantidades de obra. Así lo indicó «La alcaldía no ha cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos en el tercer comité a pesar de establecer que los enviaría en la menor brevedad posible, ya han pasado 34 días desde que se realizó este compromiso, la demora de estos

documentos de Estudios y Diseños no permite conocer: real alcance del proyecto y cantidades de obra». En ese sentido, nótese como lo dicho por el apoderado del señor BERCELY QUIROGA no es cierto al estar probadas las faltas al deber objetivo de cuidado que en el fallo del 25 de julio de 2024 le fueron reprochadas. Con respecto a la inexistencia de un daño al «patrocinio público» porque los recursos no se perdieron y que como tal no existe una conexión de algo que no existe, insiste este Despacho que el daño fue evidenciado, así como la culpa grave endilgada a los implicados y el nexo causal entre sus conductas y el daño patrimonial causado al erario. Finalmente, tampoco le asiste razón al apoderado del señor BERCELY en cuanto a la existencia de un posible «irrequicimiento» ilícito del Estado con sustento en imponer responsabilidad fiscal en contra del Sr. QUIROGA VARGAS y que con ello se estaría incurriendo en un detrimento en el «patrocinio de el a favor del Estado», en vista de que todas las actuaciones adelantadas por esta Dependencia se encuentran soportadas en las facultades legales y reglamentarias otorgadas, además de que los recursos perseguidos en ejercicio del control fiscal son de carácter público. De ahí que, al igual que el anterior planteamiento lo dicho por el inconforme frente a que los recursos destinados en el Contrato 061 de 2014, fueron usados para la construcción del puente que se encuentra ubicado en el Rio Horta y que pronto se pondría en funcionamiento una vez se termine de ejecutar la segunda etapa también está destinado a fenecer puesto que recuérdese que éste tenía previsto la construcción de la totalidad del puente y no solamente la subestructura que únicamente se construyó....”

RESPUESTA DE RECURSO DE APELACION o SUPLICA

• **Consideraciones de la Sala:**

Al respecto, se tiene que el señor QUIROGA VARGAS, fue vinculado dentro del proceso de responsabilidad fiscal en mención, en calidad de Alcalde del Municipio de El Peñón – Santander para el periodo 2012 a 2015, quien suscribió el Convenio No. 5277 del 08 de noviembre de 2013 y quien fue designado como ejecutor del del Proyecto de Inversión No. BPIN 2012004680075 de acuerdo al Acta No. 008 de 06 de noviembre de 2013, a quien le correspondía haber previsto las deficiencias que se presentaban en los estudios y diseños de la obra al momento de suscribir el Convenio y que se subsanasen los mismos antes de iniciar con el proceso de contratación de la obra, con lo que se dio paso, a que el proyecto se empezará a ejecutar con esas falencias en sus estudios y diseños, lo que conllevó a que se invirtieran y pagarán unos recursos en una obra que hoy no presta ningún servicio a la comunidad del Municipio de El Peñón, ocasionando un detrimento al patrimonio público.

Bajo estas premisas el *a quo* primero imputó y luego falló con responsabilidad fiscal, dada su conducta omisiva en relación con sus obligaciones como Alcalde del Municipio del Peñón, pues al suscribir el Convenio No. 5277 de 2013 y suscribir el Contrato No. 061 de 2014, avaló unos estudios deficientes y desembolsó los recursos correspondientes que se

invertieron en la obra, que no cumplió con el objeto social para el cual fue concebida, pues en la actualidad la obra se encuentra inconclusa y no presta ninguna utilidad a la comunidad.

Ahora bien, respecto a su argumento donde señaló que su representado no incurrió en un detrimento al patrimonio público por haber suscrito el Convenio y tampoco por el hecho de no haber realizado labores de supervisión y seguimiento, argumentando que estas labores eran propias de la Secretaria de Infraestructura del Departamento, esta Sala de Decisión no comparte lo dicho por la apoderada del señor QUIROGA VARGAS, pues tal y como se expuso líneas arriba, dentro del plenario está probado que el daño patrimonial se originó en unos estudios y diseños deficientes y él como ejecutor del proyecto para su comunidad al momento de suscribir el Convenio, avaló la realización de una obra que no se ejecutó en su totalidad en virtud de las falencias que se presentaban en los estudios y diseños, y por ende no cumplió con los fines estatales. Ahora bien, no es de recibo para esta Sala que ahora pretenda exculpar su omisión y negligencia, en que esa labor de seguimiento y control les correspondía a otros funcionarios, pues él como ejecutor del proyecto y ordenador del gasto de los recursos del Convenio, le correspondía velar por la correcta ejecución de los mismos, situación que no se dio en el caso *sub examine*, pues está probado que no se ejecutó la totalidad del objeto contractual el cual consistía en la *"construcción puente en concreto postensado de dos luces con un apoyo central cimentado dentro del cauce del río Horta el Peñón, Santander"*.

Esta Sala de Decisión le reitera las obligaciones que le competían al señor Alcalde QUIROGA VARGAS, dentro de la ejecución del Convenio No. 5277 del 2013, tal y como las expuso el *a quo* en el fallo²⁹, así:

"3) Elaborar los estudios y diseños complementarios correspondientes para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, de acuerdo al proyecto radicado y viabilizado en el Departamento de Santander. (...)

5) Ejercer la supervisión a través de la Secretaria de Planeación Municipal, sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente convenio (...)" (Resaltado fuera texto)

Por lo antes expuesto, no le asiste razón a la apoderada, pues el señor QUIROGA VARGAS debía velar por la correcta ejecución del objeto contractual en procura de los intereses de

la comunidad que para el momento de suscripción del convenio y del contrato de obra, el representaba, desde el inicio del proyecto tenía obligaciones dentro del Convenio y también dentro del Contrato de obra, adicional a las constitucionales y legales, por lo cual, no es de recibo para este Cuerpo Colegiado, que pretenda desligarse de las mismas atribuyendo una presunta responsabilidad en otros funcionarios.

Ahora bien, frente al argumento donde señaló que no existe daño patrimonial al Estado porque no hay pérdida de los recursos, reiterando que los mismos se encuentran invertidos en la obra construida y que en la actualidad la misma se encuentra en ejecución, esta Sala de Decisión reitera que lo que se discute dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, es que precisamente se invirtieron unos recursos, en la ejecución de una obra que hoy no presta ningún servicio a la comunidad, porque no se cumplió con el alcance del objeto contractual, quedando a medias, construyendo solo la subestructura de la misma, cuando lo que se debía entregar era un puente completamente construido y no solo las bases del mismo, lo que conllevó a que hoy en día se tuviera que celebrar otro contrato, es decir, se tuvieron que invertir mayores recursos de los que inicialmente se tenían previstos para la realización de esta obra.

Además, teniendo en cuenta que para terminar la obra actualmente se está ejecutando un nuevo contrato, una obra que como se probó dentro del actuar fiscal, quedó inconclusa y sin ningún tipo de funcionalidad, que se reitera obedece a unos estudios y diseños que presentaban falencias, las cuales no fueron advertidas por el señor QUIROGA VARGAS, en su deber de vigilancia y control, lo que contribuyó a que se ocasionará el daño patrimonial que hoy se endilga a su representado, por las irregularidades en esta fase de planeación. Reitera esta Sala de decisión que no es de recibo, que pretenda exculpar su responsabilidad en cabeza de otros funcionarios, por lo cual es menester, traer a colación, la sentencia del Consejo de Estado³⁰, que aplica, bajo los siguientes apartes:

*"El principio de la planeación o de la planificación aplicado a los procesos de contratación y a las actuaciones relacionadas con los contratos del Estado guarda relación directa e inmediata con los principios del interés general y la legalidad, procurando recoger para el régimen jurídico de los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la improvisación. **La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés***

CONCEPTO DE VULNERACION:

Para esta defensa los actos administrativos demandados son ampliamente vulneratorios de la constitución y de la ley por las siguientes consideraciones;

Consideramos que se vulnera el Derecho a la Defensa y el debido Proceso y se incurre en una falsa motivación de los actos con base en los siguientes Argumentos:

Errada Valoración de la Pruebas: Este argumento se basa en que en que la Contraloría General de la Nación; a través de su despacho envía un profesional para que rinda Informe técnico; esta labor le correspondió al ing. Oscar Javier Castellanos Chaparro del 29 de Abril de 2024 ordenado por el mismo despacho a través de auto 0130 del 4 de Abril del 2024, expone al mismo organismo investigador; "En la visita de inspección realizada

por el suscrito el 18 de abril de 2024 al centro poblado Bocas el Horta del municipio de El Peñón, en el sector de la desembocadura del río Horta sobre el río Blanco, se evidencio la construcción de un puente sobre el río Horta; **obra pública que a la fecha se encuentra en ejecución y cuyo alcance final es un puente vehicular apoyado en dos estribos de concreto reforzado** (uno en el costado sur en territorio del municipio de El Peñón, sobre el macizo de la orilla del río, y el otro en el costado norte en territorio del municipio de Landazuri, sobre el macizo de la orilla del río) y una pila central en concreto reforzado en el cauce de dicha corriente hídrica. El puente tiene una longitud de 61 metros (distribuido en dos luces de 30.5 metros cada una, e inicialmente estaba proyectado en vigas en concreto postensado, pero fue modificado a vigas de acero unidas con platinas y pernos, y debidamente arriostradas) y está proyectado un tablero de 4.60 metros de ancho con estructura portante metálica y losa de concreto reforzado que contenga un carril de tráfico vehicular y un andén de paso peatonal, con barandas metálicas, así como los accesos en cada extremo del puente con losas de aproximación en concreto reforzado. Esta obra pública que hará parte de la variante vial Landazuri - Corregimiento Girón - Peñón, **se encuentra en desarrollo, a través de los recursos invertidos en dos contratos de obra cuyos alcances se describen a continuación:** • **Contrato de obra No. 061 del 16 de julio de 2014 y cuyo objeto es "CONSTRUCCION PUENTE EN CONCRETO POSTENSADO DE DOS LUCES CON UN APOYO CENTRAL CIMENTADO DENTRO DEL CAUCE DEL RIO HORTA MUNICIPIO DE EL PENON, SANTANDER". Este contrato se encuentra ejecutado en su totalidad (acta de terminación del 13 de febrero de 2018) y liquidado el 27 de noviembre de 2018; fue suscrito entre el Municipio de El Peñón. con el CONSORCIO VIAS Y ESTRUCTURAS 2014 por un valor inicial de \$1,238,230,432 y un plazo inicial de 6 meses y plazo final de 14.5 meses; y a través de él se construyó la subestructura del puente, correspondiente a dos estribos en concreto reforzado (uno en el costado sur en territorio del municipio de El Peñón, sobre el macizo de la orilla del río, y el otro en el costado norte en territorio del municipio de Landázuri, sobre el macizo de la orilla del río) y una pila central en concreto reforzado en el cauce del río.** Subrayado y negrilla, fuera de texto. Este es la prueba que usa la CGR, para sancionar al demante; sin embargo como se puede ver el mismo peritazgo habla de que el recurso del contrato **No. 061 del 16 de julio de 2014,** Ha sido usado para una parte de la estructura del puente fundamental para poderlo terminar la obra total.

En el transcurso del proceso de responsabilidad fiscal las personas investigadas; tales como el contratista el interventor y los dos exalcaldes se dijo y se probó con documentos y se justificó que al comienzo se realizó con proyecto para la construcción del puente pero que al reformular el proyecto surgieron eventos y situaciones que se habían contemplado en el comienzo por lo que se debió realizar ajustes al contrato de la obra y así hacer por etapas hasta llegar a la terminación de la misma; sin embargo al contraloría NO VALORO, las pruebas conforme lo indica la Constitución y la ley y finalmente temino sancionado de manera irregular a algunos de los investigados.

2. NO EXISTE REPONSABILIDAD FISCAL:

Como se dijo anteriormente la CGN, argumenta que el Sr. Bercely incurrió en detrimento al patrimonio público; al haber suscrito el convenio para la ejecución de los recursos con la Gobernación de Santander y que por no haber realizado de manera diligente las labores de supervisión y seguimiento.

En principio, si es por, la suscripción del convenio; por faltar el principio de planeación no se puede imputar y sancionar por responsabilidad fiscal por dichas actuaciones, debido a que el aquí investigado a través de su oficina de planeación (oficina técnica), elaboro el proyecto y lo llevo a la Secretaria de Infraestructura del Departamento en donde SI, existían un grupo de expertos en obras; ingeniero civiles, arquitectos y ambientales con amplia y reconocida formación y experiencia; quienes finalmente era quienes revisaban y aprobaban la viabilidad de los proyectos en aspectos técnicos, presupuestales, ambientales y jurídicos; no obstante llama mucho la atención que a todos los integrantes de este la Secretaria de Infraestructura Departamental ; la Contraloría General de la Republica haya optado por archivar el proceso, de responsabilidad fiscal.

La ley 610 de 2000, en su artículo **5 establece**: “Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”

Para el caso que nos ocupa y exactamente en lo relacionado **con el Sr. QUIROGA VARGAS, No se dan ninguno de los elementos establecidos en la ley**; para exista responsabilidad fiscal.

a.) Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.

Mi representado actuó desde el comienzo del proceso de construcción de la obra, lo hizo pensando en el bienestar de la comunidad del sector, lo hizo con sus capacidades y en cumplimiento de sus funciones como alcalde, que le correspondía, hacer gestión, ante los entes gubernamentales de nivel nacional y departamental; eso fue lo que hizo en su calidad de alcalde.

Ahora bien, Señores Contraloría, es muy importante referirme al primer aspecto de los elementos de la responsabilidad fiscal por qué; no encuentra una conducta dolosa, **pero si culposa en el investigad, pero ello** No es cierto y no hay prueba que demuestre que el actuar del Sr. Bercely fue gravemente culposos.

b.) Un daño patrimonial al Estado: En este caso Señores Concejo de Estado es donde

quiero hacer más énfasis, porque consideramos que en el proceso que nos ocupa NO existe daño al patrimonio del estado por que NO HAY PERDIDA DE RECURSOS, según el Informe técnico rendido por el profesional Oscar Javier Castellanos Chaparro del 29 de Abril de 2024 ordenado por el mismo despacho a través de auto 0130 del 4 de Abril del 2024, expone al mismo organismo investigador; "En la visita de inspección realizada por el suscrito el 18 de abril de 2024 al centro poblado Bocas el Horta del municipio de El peñón, en el sector de la desembocadura del río Horta sobre el río Blanco, se evidencio la construcción de un puente sobre el río Horta; **obra pública que a la fecha se encuentra en ejecución y cuyo alcance final es un puente vehicular apoyado en dos estribos de concreto reforzado** (uno en el costado sur en territorio del municipio de El Peñón, sobre el macizo de la orilla del río, y el otro en el costado norte en territorio del municipio de Landazuri, sobre el macizo de la orilla del río) y una pila central en concreto reforzado en el cauce de dicha corriente hídrica. El puente tiene una longitud de 61 metros (distribuido en dos luces de 30.5 metros cada una, e inicialmente estaba proyectado en vigas en concreto postensado, pero fue modificado a vigas de acero unidas con platinas y pernos, y debidamente arriostradas) y está proyectado un tablero de 4.60 metros de ancho con estructura portante metálica y losa de concreto reforzado que contenga un carril de tráfico vehicular y un andén de paso peatonal, con barandas metálicas, así como los accesos en cada extremo del puente con losas de aproximación en concreto reforzado. Esta obra pública que hará parte de la variante vial Landazuri - Corregimiento Girón - Peñón, **se encuentra en desarrollo, a través de los recursos invertidos en dos contratos de obra cuyos alcances se describen a continuación:** • **Contrato de obra No. 061 del 16 de julio de 2014 y cuyo objeto es "CONSTRUCCION PUENTE EN CONCRETO POSTENSADO DE DOS LUCES CON UN APOYO CENTRAL CIMENTADO DENTRO DEL CAUCE DEL RIO HORTA MUNICIPIO DE EL PENON, SANTANDER". Este contrato se encuentra ejecutado en su totalidad (acta de terminación del 13 de febrero de 2018) y liquidado el 27 de noviembre de 2018;** fue suscrito entre el Municipio de El Peñón. con el CONSORCIO VIAS Y ESTRUCTURAS 2014 por un valor inicial de \$1,238,230,432 y un plazo inicial de 6 meses y plazo final de 14.5 meses; **y a través de él se construyó la subestructura del puente, correspondiente a dos estribos en concreto reforzado (uno en el costado sur en territorio del municipio de El Peñón, sobre el macizo de la orilla del río, y el otro en el costado norte en territorio del municipio de Landázuri, sobre el macizo de la orilla del río) y una pila central en concreto reforzado en el cauce del río.**" Subrayado y negrilla, fuera de texto.

Con lo anterior, que es nada más y nada menos que el concepto del técnico del ente investigador está manifestando que en la obra que aún se encuentra en ejecución están invertidos los recursos del contrato de obra 061 de 2014.

La prueba con la que la Contraloría en primera instancia está usando para condenar por un daño fiscal en ninguna parte manifiesta o deja ver que el recurso del contrato 061 de 2014, se haya perdido o que ya no se pueda hacer nada con estos recursos, por el

contrario, se está dejando ver con total claridad que estos recursos han sido invertidos en un puente que aún se está construyendo.

En el fallo de primera instancia la contraloría sostiene:

*“En efecto, el profesional de ingeniería, encontró entre otros aspectos que a pesar de **que el alcance del contrato previo construir en su totalidad el puente (Subestructura y Superestructura), lo que realmente se ejecuto fue únicamente la subestructura, con el valor realmente pagado de \$1,238,230,432, dado que el presupuesto original no contemplo las actividades correspondientes al manejo de aguas en el cauce del rio, la cual obligaba la construcción de la pila central en esa corriente hídrica.** Es más, con este elemento probatorio se logró corroborar que los recursos que se requerían para terminar el puente y ponerlo en funcionamiento superaban el 50% del presupuesto de obra permitido por el estatuto de contratación para adicionar recursos, y por ello, tal como se plasmó en el acta de liquidación, se procedió a liquidar este contrato y dar inicio a una nueva contratación.” (Negrilla y subrayado fuera de texto.) Según la misma contraloría el experto perito conceptuó que existe una posible falta de acatamiento del principio de planeación, pero NO, manifestó que los recursos dispuestos a través del contrato No. 061 de 2014, estuvieran desaparecidos; al contrario, dicho concepto es claro al manifestar que los dineros destinados para el contrato en comento sirvió para construir lo que él técnicamente denomino Subestructura”*

Y continua el experto de la autoridad de responsabilidad fiscal, al referirse al segundo contrato y que actualmente se encuentra en ejecución es decir el contrato No 2116 de 2022:

*“ El alcance propuesto con este contrato es **construir la superestructura del puente,** correspondiente a unas vigas en acero unidas por platinas y pernos, y debidamente arriostradas, **que se apoyaran sobre la subestructura** ya construida a través del contrato No. 061 de 2014, y sobre estas vigas construir el tablero del puente de 4.60 metros de ancho con estructura portante metálica y losa de concreto reforzado que contenga un carril de tráfico vehicular y un andén de paso peatonal, con barandas metálicas, así como los accesos en cada extremo del puente con losas de aproximación en concreto reforzado.*

A la fecha se evidencia la instalación de las vigas de acero con sus respectivas riostras en toda la longitud del puente (apoyadas en la subestructura), lo que representaría un avance de obra aproximado del 67.4%, sin embargo, estas obras no han sido aprobadas por la interventoría ni recibidas mediante acta parcial de obra.

El contrato se encuentra suspendido desde el 15 de agosto de 2023 debido a

varios aspectos como son la necesidad de gestionar recursos adicionales para obras no previstas, un plazo para que el Contratista diseñe dos apoyos adicionales para el lanzamiento de las vigas de acero; posteriormente durante la suspensión, el 1 de septiembre de 2023 ocurrió un incidente en obra y fue la caída de las vigas metálicas que se venían construyendo, por lo que se amplió el plazo de suspensión mientras el Contratista extraiga del río los elementos que colapsaron, y finalmente se requiere también de recursos adicionales para el contrato de interventoría.”

Y luego sostiene el mismo perito:

*“ Como se puede apreciar del resultado de la presente visita de inspección descrito en el punto anterior del cuestionario, nos encontramos frente a una obra que contiene dos grandes componentes, la subestructura correspondiente a dos estribos en concreto reforzado (uno sobre el macizo de cada orilla del río) **y una pila central en concreto reforzado en el cruce del río subestructura que se encuentra construida en un 100% y fue ejecutada a través del contrato de obra NO 061 de 2014;** y por otra parte la superestructura correspondiente a unas vigas en acero unidas por platinas y pernos y debidamente arrostizadas que se apoyaran sobre la subestructura y sobre estas vigas construir el tablero del puente 4.60 metros de ancho con estructura portante metálica y losa de concreto reforzado que contenga un carril de tráfico vehicular y un andén de paso peatonal con barandas metálicas; así como los accesos en cada extremo del puente con losas de aproximación en concreto reforzado; superestructura que se encuentra en ejecución por medio del contrato de obra No 2116 del 8 de Agosto de 2022... “*

Quiere decir lo anterior Honorables Magistrados, que los recursos de que habla la investigación los actos demandados, es decir los 1.800 millones de pesos **NO SE PERDIERON, el Estado NO los perdió;** Si, fueron utilizados en la etapa o parte técnica del puente llamada **Subestructura** del puente que aún se encuentra en construcción. Que de pronto hubo falta de planeación; es posible y quizás podremos decir que sí, pero no parte de mi representado sino de la secretaria de Infraestructura Departamental, aunque jamás por ello hubo una pérdida de recursos públicos; no Señores contraloría no es cierto que todas las veces que en un proyecto haya falta de planeación necesariamente se genere un daño fiscal y por consiguiente un detrimento patrimonial. Este puede ser un caso de miles en Colombia que falla el principio de planeación y que por ello se deba realizar adicionales a los contratos de obra o se deba reformular un proyecto de obra en etapas, pero no por ello se genera un daño al patrimonio.

En el caso concreto y manifestado por un profesional experto de la contraloría, los recursos se invirtieron, están ahí en lo que constituye parte del puente que actualmente se está terminando.

Respecto de la Responsabilidad Fiscal el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00706-0; sostuvo: “RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial. **Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial,** por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado [...]” (Subrayado y negrilla fuera de texto.). Para el caso que nos ocupa la certeza está en que NO hay daño fiscal, en que los dineros dispuestos por el contrato 061 de 2024, se construyó una parte del de la obra que pronto terminara siendo el puente vehicular sobre el río Horta, que cumínica entre el municipio del Peñón, a los municipios de Sucre, Bolívar y Landázuri.

c.) Un nexo causal entre el daño y el comportamiento del agente:

Como se dijo anteriormente, NO EXISTE daño al patrocinio público, por los recursos NO se perdieron y como tal elemento no existe tampoco hay conexión de algo que no existe.

Por lo anterior Señores Consejo de Estado es claro que no se dan los elementos legales de la responsabilidad fiscal tal y como lo determina la ley; por lo cual se considera que estos actos administrativos demandados se fundamentan en motivaciones falsas.

3. DE UN POSIBLE IRREQUICIMIENTO ILICITO DEL ESTADO A CARGO DE LOS PARTICULARES:

La CGN, posiblemente al imponer responsabilidad fiscal en contra del Sr. QUIROGA VARGAS, estaría incurriendo en un detrimento en el patrocinio de El a favor del Estado, esto porque los recursos destinados en el contrato 061 de 2014, fue usado para la construcción del puente que se encuentra ubicado en el Río Horta y que pronto se pondrá en funcionamiento una vez se termine de ejecutar la segunda etapa.

De manera que el estado quedaría con el puente construido y al servicio de este sector y por otro lado con los recursos que tienen que pagar los investigados.

Así se encuentra la obra actualmente, como se dijo anteriormente es claro que los recursos no se perdieron ni se disminuyeron, sino que sirven para seguir en la etapa final de construcción de puente.



Fotografía 1



Fotografía 2



VIOLACION AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA.

Teniendo en cuenta que el **informe técnico rendido por el profesional Oscar Javier Castellanos Chaparro el 29 de abril de 2024**, ordenado por este Despacho a través del auto URF1-0130 del 4 de abril de 2024, con el fin de establecer el estado actual de la obra producto del Contrato 061 de 2014, es la principal prueba en la que apoya el acto de sanción de responsabilidad fiscal y que según ha manifestado mi poderdante jamás se les traslado al investigado para que estuviera la posibilidad de ser controvertido; lo anterior vulnera el derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la defensa.

Tenemos que en el presente proceso; no se traslada la prueba para que esta a su vez pueda ser controvertida; y por otro lado; la Contraloría NO le da valoración a la prueba que le exige la ley; ya que el perito no manifiesta que hay un detrimento a los bienes del estado, ni que no hayan invertido los recursos.

La ley 1474 de 2011, establece que a quien le corresponde la carga de la prueba es a la CGN, para proceder a imponer responsabilidad fiscal, además de lo anterior la constitución y la ley le impone el deber al operador o agente de la investigación fiscal de valorar la prueba y los hechos, para así lograr encontrar la verdad y poder tomar una decisión en equidad y con justicia.

Al estudiar un fallo sobre la responsabilidad fiscal del administrador de un contrato de obra, la Sección Primera del Consejo de Estado realizó un estudio sobre el régimen probatorio en esta clase de procesos. Indicó que, de acuerdo con el principio de necesidad de la prueba, en materia de responsabilidad fiscal, los actos administrativos que contienen las decisiones de responsabilidad deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso sobre daño patrimonial y responsabilidad del investigado.

En este sentido, aclaró, el daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquier medio de prueba y las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional. Así mismo, el investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea en la indagación preliminar o a partir de la notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

Otra facultad que tiene el investigado es la de controvertir las pruebas, lo cual puede realizar una vez vencido el término de traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley 610 del 2000, presentando los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas y solicitando y aportando las pruebas que se pretendan hacer valer.

En cuanto al decreto y práctica de pruebas, se tiene que, una vez vencido el término de traslado del auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que considere pertinentes y conducentes. Si se profiere un auto que rechaza la solicitud de pruebas, la parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación contra el mismo. Por otro lado, se expone que las pruebas recaudadas sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.”

4. DE LA CADUCIDAD EN EL CASO EN CONCRETO:

De otra parte en lo que tiene que ver con el investigado Sr. QUIROGA VARGAS, se demostrara que la investigación surtió el fenómeno de la CADUCIDAD, con base en lo siguiente: En la página 109 del fallo de responsabilidad fiscal, el despacho manifiesta: “*Fue vinculado a la investigación en calidad de ordenador del gasto, toda vez que presento el **proyecto y suscribió el convenio Marco de Cooperación No 5277 de 2013, en representación del Municipio de Peñón**...*” Quiere decir lo anterior que el Sr Quiroga fue vinculado por esos hechos que ocurrieron en el año 2013 y la investigación fue apertura da el día 21 de Mayo de 2019, habiendo pasado más de seis años luego de la ocurrencia de los hechos. (subrayado y negrilla fuera de texto).

El Artículo 9 de la ley 600 de 2000, establece: “CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. **La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público**, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto. La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública.” (subrayado y negrilla fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior deberá la CGR, optar por declarar la caducidad de la Acción Fiscal en contra de mi defendido.

FALSA MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

Los actos Administrativos demandados están motivados con base en hechos inexistentes e irreales contrarios a las pruebas que estaban dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se usaron las pruebas verídicas que

La falsa motivación de actos administrativos en Colombia ocurre cuando una autoridad pública justifica una decisión con razones que no son verdaderas o que no tienen relación con la realidad.

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Art. 29. 83. 90 de la Carta Política, 85 del C.C.A, ley 610 de 2000, ley 1395 de 2010, ley 80 de 1993, Decreto 3071 de 1997, ley 223 de 1995. Código de Comercio, Código Administrativo y Contencioso Administrativo, demás normas complementarias y concordantes.

VII. CUANTIA Y COMPETENCIA

Por la naturaleza del asunto y lugar de ocurrencia de los hechos es usted competente, la cuantía se estima en la suma de \$100.000.000 que resulta de la sumatoria de los perjuicios sin incurrir en lo que el transcurso del proceso pueda ser probado.

VIII. PRUEBAS

Sírvase tener como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTALES

- Auto fiscal No. URF1-0006 del 25 de julio de 2024 *“Por medio del cual se profiere fallo mixto de responsabilidad fiscal dentro del prf-2019-00495 - departamento de Santander”*, Auto No. 00262 del 14 de agosto de 2024 “
- Auto mediante el cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra el fallo mixto de responsabilidad fiscal dentro del prf-2019-00495 - departamento de Santander entre otras disposiciones”,
- Auto No. ORD -801119-199-2024 del 12 de septiembre de 2024 *“Por el cual se revise en grade de consulta y desatan unos recursos de apelación contra el fallo con y sin responsabilidad fiscal proferido dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 2019-00495.”*
- Informe técnico rendido por el profesional Oscar Javier Castellanos Chaparro el

29 de abril de 2024, ordenado por este Despacho a través del auto URF1-0130 del 4 de abril de 2024

- Poder para Actuar.
- Constancia expedida de la PROCURADURÍA 215 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS de no conciliación del asunto de la referencia.

2. OFICIOSA

Sírvase oficiar a la Contraloría General de la Republica- - para que con destino a este despacho allegue copia íntegra del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-2019-0495

3. TESTOMONIALES:

Nombre y apellidos: Ruddy Alexandra Mosquera Vargas

Cedula de ciudadanía 1098780253

Dirección: Vereda Robles, El Peñón Santander

Teléfono: 3222007947

Correo electrónico : ruddyalexandramosqueravargas@gmail.com

Cargo o Rol: Psicóloga

Agustín Ariza Rodríguez

C.C. 13.706.693 de Bolívar Santander

Vereda otoval municipio el peñón

Celular 310 259 94 44

Otovalena@gmail.com

Presidente de la asociación la Otovaleña

Nombre y apellidos: Jorge Eli Morales

C.C. 91.362.244

Dirección: vereda Bajo Ceiba, municipio de El Peñón Santander

Teléfono:3213837765

Correo electrónico : jm3623289@gmail.com

Cargo o Rol: Líder comunal y exconcejal Municipio de El Peñón Santander

Sírvase Honorables Magistrados llamar a declarar a las anteriores personas quienes podrán dar fe de como fue el proceso de la obra y que no perdieron ni extraviaron recursos públicos.

IX. ANEXOS

Poder otorgado en debida forma

Lo relacionado en el acápite de pruebas

X. NOTIFICACIONES

- El accionante en bercely_qv@hotmail.com,
- La accionada Contraloría General de la Republica
- La agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Cra. 13 No. 2ª -40 Bogotá D.C.
- El suscrito en la Carrera 10 No 9 – 31 Oficina 202, Edificio IMPERIUM, San Gil, Santander. Email mariangel2016r@gmail.com, mariangel2_3@hotmail.com

Cordialmente,



MARIA EUGENIA RANGEL GUERRERO
C.C. 37.896.860 de San Gil
T.P.